

Alimentación, Inflación y Política Alimentaria

Sergio Britos¹

Luego de la profunda crisis socioeconómica e institucional de fines de 2001 y 2002, y bajo la perspectiva de la nutrición y las políticas alimentarias, Argentina enfrenta una serie de paradojas y desafíos.

Por un lado, en 2002 y 2003, el país parecía inmerso en una catástrofe alimentaria de la cual emergían imágenes e historias conmovedoras de niños desnutridos. Diferentes sectores se movilizaron en una suerte de cruzada contra el hambre. Fue el turno de miles de comedores y experiencias comunitarias, el boom de la solidaridad sojera y más tarde el inicio del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria "El Hambre más Urgente".

Sin embargo, apenas pasaron más de tres años y estamos en presencia de lo que ya varios denominan una "bomba sanitaria". La Encuesta Nacional de Nutrición y la de Factores de Riesgo plantean que el sobrepeso y obesidad constituye hoy el desafío quizá más importante y objetivo prioritario de la política de salud y alimentaria.

Por otra parte, las autoridades económicas y en especial las de comercio están librando una fuerte batalla por controlar los precios de los alimentos básicos. ¿por objetivos de salud o nutrición? No lo parece.

Por último y para cerrar esta breve introducción, la cadena de valor agroalimentaria de Argentina está atravesando una época de bonanza, fruto de la modernización tecnológica de la última década, estructuras de gobernanza más eficientes y una coyuntura mundial altamente demandante de alimentos. Mientras tanto, desde ámbitos oficiales pareciera que el desarrollo del sector agroalimentario es antagónico a los objetivos de crecimiento con equidad.

Pues bien, casi cuatro años de gestión del programa alimentario más importante de este gobierno, la necesidad de poner en acciones los resultados de la encuesta de nutrición y la formidable coyuntura del sector agroalimentario debieran ser motivo de construcción más que de antagonismo.

Un ejemplo en este sentido lo ha dado esta misma gestión de gobierno en el área de Salud cuando ya desde 2002 puso decididamente en ejecución sendos programas de fortificación de la leche primero y de la harina más tarde con el objetivo de reducir la anemia por deficiencia de hierro en la infancia y la deficiencia nutricional de ácido fólico en mujeres en edad fértil. Ambos problemas fueron debidamente identificados, la industria apoyó y acompañó la política de fortificación planteada por las autoridades y el Ministerio de Salud condujo con decisión la implementación de los programas.

En la actualidad y entre muchos temas de agenda, hay algunos puntos que consideramos menester discutir.

En primer término, siendo como parece la prevención del sobrepeso un objetivo estratégico de las políticas de salud creemos importante que se revisen algunos de los programas que el mismo Estado financia y que parecen contrapuestos con aquel objetivo. Reiteradamente hemos planteado que el perfil nutricional de los alimentos que se distribuyen en los clásicos programas de reparto de cajas y los menús de gran parte de los

¹ El autor es licenciado en nutrición y se encuentra completando la Maestría en Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la misma Universidad como Profesor Titular (int) por concurso de las Cátedras de Economía General y de Política Alimentaria en la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina. Es Director Asociado del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil y coordina la sección Nutrición, Economía y Agroalimentos del sitio www.nutrinfo.com.ar

comedores comunitarios tienen un sesgo "obesogénico", dado por un alto, quizá excesivo, aporte de calorías de baja calidad.

Con algunas excepciones, este mismo comentario vale para los comedores escolares. Es sabido que en una importante cantidad de escuelas de todas las provincias, los fondos para comedores son o bien escasos, o irregulares, no acompañados por una adecuada capacitación y orientación para quien decide la alimentación y realiza las compras. Por paradójico que parezca, hay proyectos de kioscos saludables en escuelas cuyos comedores por cierto distan de serlos.

El mismo impulso que el propio Gobierno parece al fin estar dándole a formatos modernos de asistencia -las tarjetas magnéticas de compra de alimentos por ejemplo- puede aplicarse a comedores escolares, probablemente no con tarjetas (o sí), pero sí a través de una mejor programación de menús, profesionalización de la tarea del comedor y una organización moderna y eficiente de los recursos que se le destinan.

En síntesis, migrar desde el comedor estilo "almacenero" a un modelo más profesionalizado, basado en protocolos y normas de alimentación escolar.

Hay antecedentes en un sinnúmero de países, Chile el más cercano pero no el único, en donde los programas de alimentación escolar hace tiempo han dejado atrás los sistemas basados en la discrecionalidad de maestros y cocineras.

Pensar en un programa de alimentación escolar en el contexto de escuelas con chicos de toda condición nutricional (por un lado pobres y petisos pero a la vez con sobrepeso y por otro no pobres con malos hábitos alimentarios) implica incluir en la agenda algunos o varios de los siguientes temas:

- 1.- ¿ qué comidas debe ofrecer el comedor escolar, qué importancia merecen los desayunos o las meriendas y cuál los almuerzos ?
- 2.- ¿ quién y bajo qué protocolos debe normatizar el contenido nutricional de las comidas y la organización de las compras, la preparación y servicio a los chicos ? ¿ cómo garantizar y verificar que los protocolos se cumplan ?
- 3.- ¿ qué se entiende por kiosco saludable ? los alimentos menos saludables se prohíben o se regulan ?
- 4.- ¿ cómo se compromete la comunidad educativa con la formación de hábitos alimentarios saludables a través de la currícula escolar ?
- 5.- ¿ no es la escuela un ámbito para formar consumidores responsables y mejor informados para enfrentar el marketing alimentario ?

Dejamos para el final una reflexión: ¿ porqué el sector agroalimentario y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación no tienen injerencia en la discusión de estos temas ? Pensemos que tan solo con los casi 6 millones de chicos que van a las escuelas primarias -sin ponernos a diferenciar quienes van a comedores y quienes no- estamos hablando de unas 600 tn de pan, 1200 de leche y 1200 de frutas **por día**, cifra que debiera despertar el interés y la vocación por generar alianzas más que antagonismo.

Otro aspecto que nos parece importante considerar tiene que ver con la cruzada antiinflacionaria en la que está inmerso el Gobierno y que ha encontrado en el sector alimentario el adversario a confrontar.

Pongamos algunas cifras: si el 10% de los argentinos está por debajo de la línea de indigencia por sus bajos ingresos esto significa que algo más de 33 millones no nos encontramos en una situación tan gravosa por los aumentos de precios de alimentos. Alguien se preguntó porqué entonces el sector agroalimentario al que se le imponen retenciones, se le limitan o prohíben exportaciones o se los controla y regula tiene que subsidiar a toda la población y no solo a quienes no acceden a la canasta básica de alimentos (CBA) ?

¿ porqué quien come lomo con frecuencia no paga su precio real para que así quienes comen asado diariamente puedan acceder a un mejor precio ?

¿ porqué toda la población tiene que beneficiarse con precios regulados si quienes tienen problemas de acceso son 4 y no 38 millones de personas ?

Es probable que la respuesta a este tipo de interrogantes no tenga mucho que ver con un sincero objetivo alimentario o de mejor nutrición sino con una necesidad por mostrar índices inflacionarios bajos, de la manera que sea.

Si la preocupación -genuina, irreprochable- por la inflación tuviera su razón de ser en cómo proteger el acceso económico de los pobres a los alimentos y su mejor nutrición, podrían usarse mecanismos mucho más eficientes y transparentes: una vez más, nuestra apuesta por subsidiar el precio de los alimentos a través de tarjetas magnéticas, focalizando de esta manera el subsidio en quienes más lo necesitan.

Y de paso, librando de ataduras al sector que produce, invierte y exporta alimentos. De paso reflexionemos que esa es la única manera genuina de producir a mediano y largo plazo una oferta abundante de alimentos y precios razonables.

Hemos calculado que un subsidio al precio de los alimentos para los indigentes de manera que equipare sus ingresos al costo de la CBA representa **no más de un 22%** de lo que actualmente recauda el Estado vía retenciones tan solo contabilizando las correspondientes al complejo trigo-maíz-girasol-soja.

Si se suman las retenciones al conjunto de productos del sector agroalimentario (lácteos, carnes, etc.), **el porcentaje bajaría mucho más aún.**

¿Cuál es el significado de estos números ? Que tan solo con una ínfima porción de lo que se impone vía retenciones al sector más dinámico de la economía sería posible mejorar el acceso y la nutrición de las familias indigentes.

Eso sin contar que el presupuesto que se destina a planes sociales, muchos de ellos altamente ineficientes y clientelares en exceso, sería suficiente para montar un subsidio al precio de alimentos focalizado en los indigentes.

*No queremos pecar de ingenuidad. Es claro que **las retenciones a las exportaciones tienen mucho antes que un objetivo alimentario uno fiscal.** El modelo económico actual y no la canasta alimentaria de los más pobres es la causa de las retenciones.*

Sin embargo siempre se argumenta que su implementación y sucesivos aumentos se originan en la necesidad de mantener los precios de alimentos y el poder de compra de los pobres e indigentes.

Que quede claro que no se "castiga" al agro para mejorar el poder adquisitivo de los pobres sino para recaudar y mantener el superávit fiscal.

Hasta el momento y desde fines de 2005, el Gobierno ha ensayado controles de precios, limitaciones y prohibiciones a la exportación e intervenciones en los mercados con un modesto resultado ya que productos que inciden significativamente en la canasta alimentaria han aumentado por encima de la inflación. Muchos de esos bienes son productos de alto valor nutricional con lo que la dieta de los argentinos pobres seguramente ha empeorado en calidad.

Quizá sea necesario reflexionar que el modelo económico actual es compañero de ruta de tensiones inflacionarias permanentes, dadas por la conjunción de un dólar alto, en un contexto internacional fuertemente demandante de alimentos y con niveles de consumo interno en recuperación que no son acompañados en igual magnitud por la producción.

Todo indica que el ciclo de precios altos de los principales alimentos producidos por Argentina seguirá por algún tiempo. Mucho más a partir de la etapa que se avecina en materia de biocombustibles.

Si vamos a convivir con una tendencia de precios de alimentos alcista, en términos de política alimentaria y objetivos de nutrición tendremos que preguntarnos si seguiremos con los mismos formatos de planes sociales que hasta ahora persisten, si continuará y hasta cuando la política basada en retenciones a las exportaciones o si ingresamos en una etapa caracterizada por subsidios más eficientes y focalizados a los indigentes, aún cuando persistan algunos acuerdos puntuales con el sector agroalimentario a la manera de los que acaban de rubricarse con el sector lácteo y los subsidios cruzados a partir del aumento de las retenciones a la soja.

Otra cuestión también vinculada aunque no directamente con la inflación es la necesidad de educar o formar una conducta alimentaria más responsable en los consumidores. Reiteradamente hemos hablado o presentado trabajos sobre la monotonía alimentaria como paradigma de la dieta -no tan solo de los pobres-. Dos tercios de la ingesta de proteínas proviene de 2 alimentos: carne (mayoritariamente) y leche; la variedad en el consumo de hortalizas (de todo tipo y de todo precio) y de frutas es mínima; la tendencia de consumo de alimentos de alto precio en relación con su valor nutricional es sostenida y la comida fuera del hogar -naturalmente más cara- también, por necesidad o por comodidad.

El marketing alimentario, las campañas publicitarias en especial las que se orientan al segmento de consumo infantil, tiene una tendencia de vertiginoso crecimiento y en no pocas marcas parece tener éxito en fidelizar clientes y coronarse con el éxito en las ventas.

Ejemplo de ellos es el mercado de yogures y postres o el de aguas y bebidas saborizadas.

Otro caso, los programas de la televisión por cable con foco en la cocina gourmet o la gastronomía son cada vez más frecuentes.

Sin embargo, no existe ninguna campaña ni programa formal de educación alimentaria, que tenga por objetivo primordial la formación de una conducta consumidora más responsable, con base en una adecuada información sobre nutrición, precios y usos de los alimentos.

Tal programa o campaña debería emular los recursos del marketing empresario y planear piezas comunicacionales innovadoras, sostenidas en el tiempo y una vez más, buscar alianzas, en este caso con supermercados y la propia cadena agroindustrial.

Por último, el mercado global de alimentos, a instancias de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones expertas, está mostrando una incipiente tendencia a desarrollar alimentos más saludables y elaborar estrategias o políticas corporativas de salud y bienestar así como también un marketing pretendidamente más responsable.

Algunas empresas globales y organizaciones incluso plantean el uso de sistemas basados en claims y señalamiento de las variedades de alimentos más saludables.

Nuestro Código Alimentario acaba de introducir una modificación de importancia en relación con la información nutricional en el etiquetado. Un cambio significativo que sin embargo aún pasa desapercibido por la población.

El rótulo nutricional tiene una enorme potencialidad para convertirse en una herramienta para que el consumidor pueda realizar elecciones más razonadas y una mejor compra de alimentos.

La información nutricional en las etiquetas, los claims o afirmaciones de propiedades nutricionales y la comunicación publicitaria constituyen espacios potenciales para equilibrar la información asimétrica a la que se enfrenta el consumidor.

Hay allí entonces otro aspecto interesante para trabajar en políticas alimentarias: cómo educar a los consumidores para un uso inteligente de la información nutricional de las etiquetas y cómo dar un paso más, con las propias empresas del sector, en el sentido de hacer del rótulo un factor de diferenciación de alimentos con valor agregado en sus aspectos nutricionales.

Para esto creemos necesarios dos desarrollos: definir y acordar protocolos de buenas prácticas nutricionales en relación con el desarrollo y valor nutricional de alimentos (algo así como definiciones operacionales de lo que entendemos por alimentos más saludables) y avanzar hacia esquemas simples de identificación de esos atributos de más valor en los productos, es decir, formas amigables para que cualquier consumidor, al leer una etiqueta entienda cuáles productos tienen mejores atributos y cuáles menos.

La agenda de las políticas alimentarias es frondosa y como cualquier agenda, requiere la construcción de alianzas virtuosas entre sus muchos actores. En este paper nos hemos ocupado de tan solo tres aspectos: cómo profundizar el cambio en algunos programas alimentarios (tarjetas magnéticas y mejoramiento de los comedores y la nutrición escolar), cómo compatibilizar el escenario internacional y exportador favorable con precios razonables para los más pobres y cómo pensar estrategias y herramientas proactivas para que el consumidor pueda hacer una mejor compra de alimentos.

La mala alimentación y la inflación hoy constituyen dos preocupaciones centrales de la administración. Es momento quizá de pasar a una acción más decidida con instrumentos eficientes.